

Pobreza, conflictividad social y política asistencial en Argentina durante la primera fase de implementación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ante la pandemia de COVID-19

Dra. Tamara Seiffer¹,

Dr. Emiliano Mussi²

Dra. Julieta Pacheco³

Fecha de recepción: 24/05/2022

Fecha de aprobación: 24/08/2022

Resumen

En este artículo se presenta un cuadro de la situación de la clase obrera argentina en la coyuntura marcada por el ASPO ante la pandemia de COVID-19, realizamos un análisis de la conflictividad social y mostramos la particularidad, el alcance y los límites de la política asistencial y del gasto destinado a tal fin dentro de una tendencia de más largo plazo.

Palabras clave: POBREZA - CONFLICTIVIDAD SOCIAL - POLÍTICA ASISTENCIAL - COVID-19 - ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN ARGENTINA

Abstract

This article presents a general overview of the argentinian working class situation in the context of the "ASPO" policy implemented to face COVID-19 pandemic. We analyze social conflict and show the particularity, scope and limits of social care policy and spending for that purpose within a long-term trend.

Keywords: POVERTY - SOCIAL CONFLICTIVITY - CARE POLICY - COVID-19 - CAPITAL ACCUMULATION IN ARGENTINE

1. Introducción

En trabajos anteriores hemos mostrado de qué manera el lugar que Argentina ocupa en la división internacional del trabajo como proveedora de materias primas (particularidad que comparte con el resto de los países de América del Sur) y las transformaciones del capital desde mediados de la década del '70 explican la situación de creciente empobrecimiento que padece la clase obrera local debido a que los capitales que operan internamente (tanto extranjeros como nacionales) encuentran allí una fuente extraordinaria para su valorización (Seiffer, Kornbliht y Mussi, 2016).

La pandemia aceleró los tiempos de una crisis social que estaba en marcha con un estancamiento en la creación de empleo privado, el peso del trabajo no registrado y la caída salarial. La población más afectada fue la porción de la clase obrera determinada como estancada o consolidada en su condición de sobrante⁴ para las necesidades de

¹ UNQUI-CONICET/UBA-UNCPBA) Contacto: seiffertamara@gmail.com;

² UNGS. Contacto: emilianomussi@gmail.com;

³ UNQUI-CONICET/UBA. Contacto: julieta.pache@gmail.com

⁴La acumulación de capital se lleva a cabo mediante un continuo cambio cualitativo de su composición: su parte constante crece a expensas de su parte variable. En la medida que la demanda de fuerza de

valorización del capital compuesta por trabajadores informales, desocupados, subocupados demandantes, muchos de los cuales habitan villas y asentamientos, e incluye a aquellos determinados a su vez como población indígena.⁵ En el primer apartado de este trabajo presentamos un cuadro de la situación de la clase obrera argentina en esta coyuntura, marcada por su fragmentación y pauperización.

Si bien el nuestro es un país que presenta históricamente una gran movilización social con marchas, cortes de ruta, huelgas y otras formas de protesta⁶ y durante el periodo bajo análisis se llevaron adelante muchas medidas de lucha, la conflictividad disminuyó tanto por las restricciones impuestas por el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) vigente desde el 20 de marzo de 2020 como por la legitimidad que alcanzaron las medidas dispuestas por el gobierno. Como desarrollamos en el segundo apartado, el análisis de la conflictividad durante el período evidencia a su vez la multiplicidad de demandas dada por la diversidad de sujetos sociales que operan en este ámbito de acumulación y su concentración en las fracciones de la clase obrera que viven en villas y asentamientos.

Como resultado de esas luchas se amplió el alcance de la política asistencial y el gasto destinado a tal fin, situación que, como mostramos en investigaciones anteriores, se inscribe en un proceso de largo plazo por las mismas transformaciones que sufre la clase obrera que se asienta en nuestro país (Seiffer y Rivas Castro, 2019 y Seiffer, Kornblihtt y De Luca, 2012). En el tercer apartado tratamos el tema de la política asistencial y mostramos que su alcance en la reproducción de los sectores más pauperizados de la clase obrera permitió contener parcialmente la crisis que implicó la implementación del ASPO, cuando, en cambio, llegó más tardía y limitadamente a las fracciones que no entran en las redes asistenciales clásicas.

2. La situación de la clase obrera: fragmentación y empobrecimiento

A partir de la década del '70, el capital radicado en el país sostiene su valorización sobre la base de fragmentar a la clase obrera y pagar de manera creciente la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Como muestran diferentes investigaciones, aunque no profundizaremos aquí, es la forma en que el capital local compensa la baja productividad del trabajo que pone en marcha ante la insuficiencia de la renta de la tierra agraria de la cual se apropia (Iñigo Carrera, 2007; Cazón, Kennedy y Lastra, 2016). Lo peculiar de los

trabajo está determinada por esta última, la misma no crece de manera proporcional al aumento del capital global. Tal como señala Marx “la acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien, y precisamente en proporción a su energía y a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y por tanto superflua” (Marx, 2005, p. 784). Su existencia se vuelve una palanca para el proceso de acumulación en la medida en que el capital encuentra allí de manera permanente una masa de seres humanos disponibles a ser explotados y porque garantiza el movimiento fluido de la acumulación al poner coto al crecimiento de los salarios. No se trata de una población homogénea, la misma puede tomar varias formas. Algunas de las formas que toma nacionalmente serán abordadas en el primer apartado de este artículo.

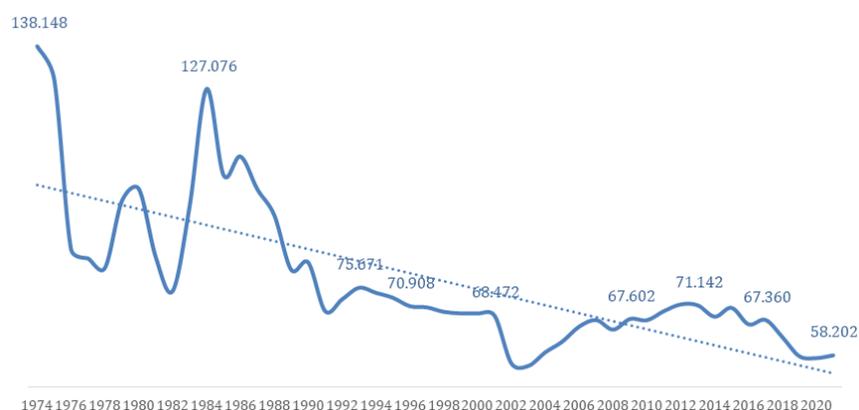
⁵Para el abordaje de la población doblemente determinada como obrera y como indígena, ver Iñigo Carrera e Iñigo Carrera (2017).

⁶Se pueden consultar publicaciones de conflictividad del Observatorio del Derecho Social-CTA, PIMSA, CELS, Nueva Mayoría y Diagnóstico Político, entre las más conocidas. Para la conflictividad durante el periodo bajo estudio confeccionamos una base de datos propia a partir del relevamiento de las principales fuentes periodísticas escritas de tirada nacional y local, prensa partidaria y redes sociales. Las medidas relevadas y sus fuentes pueden consultarse en Seiffer, Pacheco y Mussi (2020). Incorporamos asimismo información provista por Maceira (2020a y 2020b).

últimos años es que este fenómeno no se da bajo la forma de un aumento abierto del desempleo, como se observa en las décadas del '80 y '90, sino sobre todo con el crecimiento del empleo precario y mal pago, a tal punto que se consolida una fracción de ocupados plenos no registradas que perciben un ingreso que difícilmente supera el umbral de pobreza.

Como mostramos en trabajos anteriores, en una mirada de largo plazo el salario promedio del total de la economía registra una tendencia a la caída constante, en el que los momentos de recuperación son insuficientes para alcanzar los niveles previos (Kornblihtt, Seiffer y Villanova, 2014; Kornblihtt *et. al*, 2022). En el 2021, el salario directo promedio de la economía fue \$58.202 en pesos de ese año, y representó una caída de 57,9% respecto al mismo salario de 1974 en términos reales. Dicho salario se ubicó en un nivel similar al año 2004 (\$58.993 pesos del 2021), por debajo de cualquier año de la década del '90, que en promedio se ubicó en \$72.765 en moneda constante. Si se compara con el último gobierno kirchnerista, registró una caída de -18,5% respecto al 2012, el mejor nivel luego de 1996, y de -17,4% respecto al 2015. Asimismo, en el 2021 el salario aumentó 1,3% respecto al 2020, que había disminuido -0,8% respecto al 2019, lo que se acumula a las caídas interanuales del 2018 (-6,7%) y del 2019 (-7,8%) (Gráfico 1).

Gráfico 1. Salario directo mensual promedio de la economía. En pesos constantes de 2021.



Fuente: Para el período 1974-2004 (Iñigo Carrera, 2007); 2005-2021 actualización propia sobre las mismas bases.

La baja salarial durante los años '80 y '90 se imponía con niveles de desempleo crecientes, que en la década del '90 y los primeros años del 2000 llegaron a los dos dígitos. Esto se expresaba en que la población crecía a un ritmo mayor que el empleo. En cambio, a partir del 2003, la tasa de crecimiento del empleo acompaña, e incluso supera por momentos, el aumento estimado de la población. Si se observa la última década, entre el 2012 y el 2021, la población aumentó 10,6% y así también lo hizo el empleo total.⁷

Este movimiento se expresa en el descenso de las tasas de desocupación: a partir del 2003 y hasta 2006 el desempleo disminuye, momento en el que alcanza un dígito, y se mantiene con oscilaciones en esa cifra. La excepción se encuentra en el contexto de la

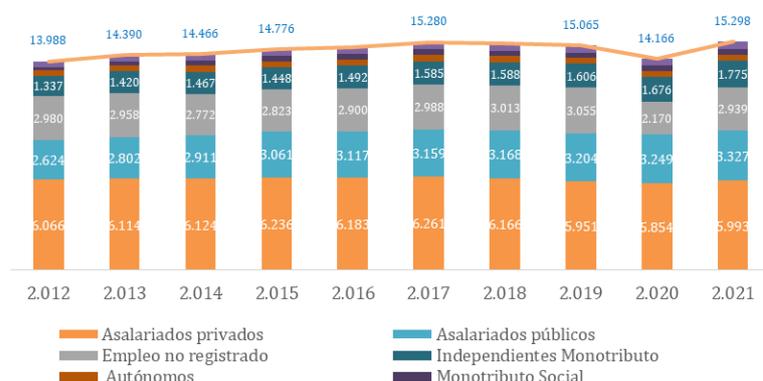
⁷El 10,6% en la estimación propia a partir de EPH y 9,4% si se consideran las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo en relación con el trabajo registrado y no registrado.

pandemia, durante el 2020 y el primer trimestre del 2021, con cifras de desocupación que superan el 10% y se explica principalmente por la caída de la actividad debido a los límites a la circulación impuestos por el ASPO.

Así es que en las últimas dos décadas, la baja salarial no se impone sobre la base del aumento del desempleo, sino a partir de la creación de empleo precarizado y no registrado, pero también del empleo público (sobre todo de nivel subnacional), que constituyen los segmentos en el que se ubican los salarios más bajos.⁸ El capital avanza, de esta forma, fragmentando las condiciones de reproducción de la clase obrera en un proceso de pauperización general. En este sentido, la mayor novedad de los últimos años es la expansión de trabajadores pobres con empleo. El capital les reproduce, ya no simplemente por debajo de las condiciones normales, es decir, de manera atrofiada, sino que les priva de alcanzar el nivel mínimo de subsistencia (sancionado socialmente) al ubicarles por debajo de la línea de pobreza.

Si consideramos el mercado de trabajo en la última década, encontramos que existe una fuerte segmentación, en el que los rubros que más crecen son los más precarios. Se observa que la mitad de los trabajadores (51%) integraban alguna categoría entre asalariados públicos (21%), empleadas no registradas (20%) o monotributistas independientes (10%). El otro 39% eran asalariados privados y el resto se empleaba como asalariados de casas particulares o monotributo social. (Gráfico 2).

Gráfico 2. Trabajadores registrados según modalidad ocupacional principal (total nacional) y trabajadores no registrados (total aglomerados EPH). En miles.



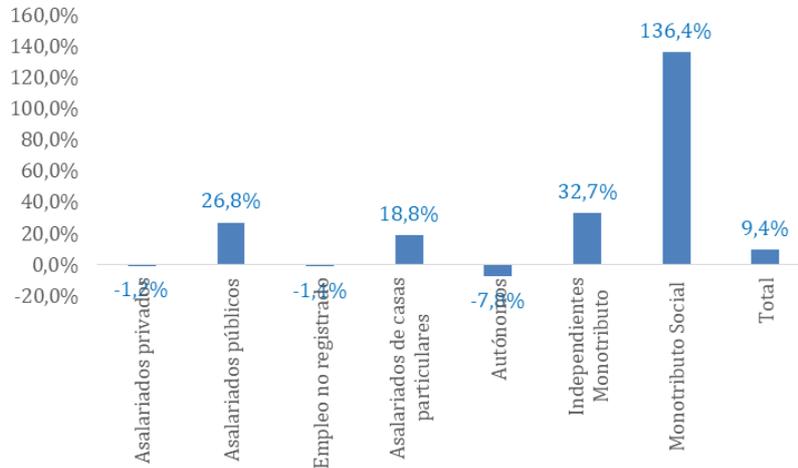
Fuente: Elaboración propia sobre la base de SSPEyE-MTEySS, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP) y MTEySS – SSPEyE - Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, en base a EPH (INDEC).

Una característica de esta etapa es que cae la participación del empleo asalariado registrado privado en el total de trabajadores, mientras que crecen las formas más precarias de empleo. El rubro del empleo que más creció en el período 2012-2021 fue el monotributo social (136,4%), que es una forma de registrar al trabajo precario realizado por cuenta propia; luego los monotributistas independientes (32,7%), en tercer lugar las asalariadas públicas (26,8%), y en cuarto lugar las asalariadas de casas particulares (18,8%). Como veremos, los rubros que más crecen en los últimos años son

⁸Sobre cómo esto afecta a las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de las políticas sociales y los procesos de trabajo de los trabajadores sociales, ver Cademartori (2022).

los sectores peor pagos. En cambio, los asalariados privados registraron una variación de -1,2% y los monotributistas autónomos de -7,3%. (Gráfico 3).

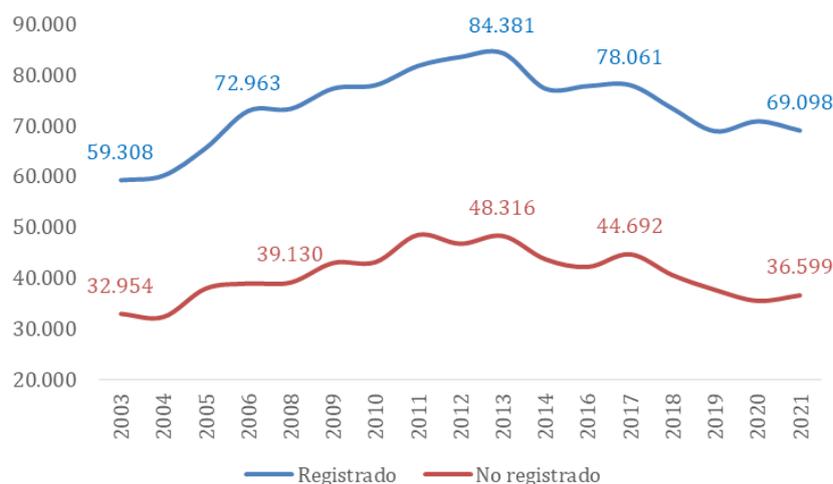
Gráfico 3. Tasa de variación porcentual de las distintas modalidades de trabajo (2012-2021).



Fuente: Elaboración propia en base a SSPEyE-MTEySS, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP) y MTEySS – SSPEyE - Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, en base a EPH (INDEC).

Este crecimiento del empleo no registrado se asienta en que el ingreso de un asalariado registrado es, en promedio para el período 2003-2021, 81% más alto que el ingreso del no registrado. Dicha cifra es aún más alta en los últimos años: en el 2020 fue del 100% y en el 2021 del 89% (Gráfico 4).

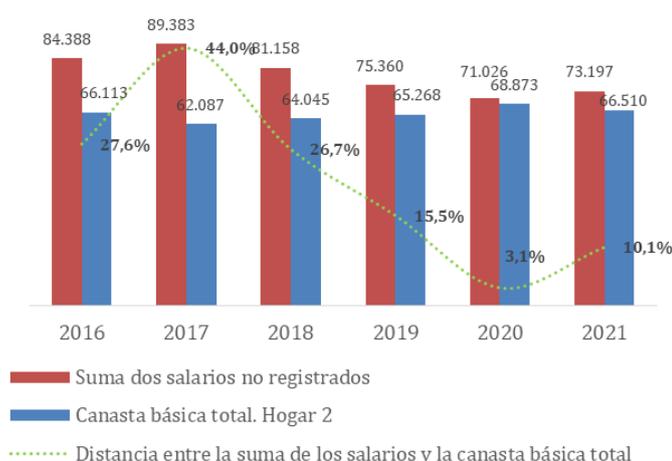
Gráfico 4. Ingreso medio de los asalariados registrados y no registrados plenos* en el total de aglomerados relevados en pesos constantes 2021. 3° trimestre de años seleccionados.



Fuente: Elaboración propia con base en MTEySS – SSPEyE - Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, sobre la base de EPH (INDEC). *Ingreso de la ocupación principal de los ocupados que trabajan 35 o más horas semanales, excluyendo beneficiarios de planes de empleo.

Es justamente en estos años en que, frente a la caída de los ingresos en términos reales, los trabajadores plenos del sector informal apenas alcanzan a cubrir la canasta básica total. Si consideramos el monto total de la canasta básica para dos adultos en edad de trabajar y dos menores en edad escolar (Hogar 2) y lo comparamos con dos ingresos de ocupados no registrados en términos reales, encontramos que en el 2017 ambos salarios estaban 44% por encima de la canasta básica; por su parte, en el 2021 esa diferencia se achicó al escaso 10,1%. De esta manera, estamos en presencia de una porción creciente de la clase obrera ocupada plena, esto es que trabaja al menos 35 horas, y que apenas logra ubicarse por encima del umbral de pobreza (Gráfico 5).

Gráfico 5. Distancia porcentual entre la suma de dos ingresos de asalariados no registrados y la canasta básica total de un hogar con dos adultos en edad de trabajar y dos menores en edad escolar (2016-2021). Pesos constantes 2021.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de MTEySS – SSPEyE - Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, con base en EPH (INDEC) e INDEC.

El resultado general es que desde al menos el 2016, el aumento de la tasa de pobreza se consolida por encima del 30% de las personas, con un leve descenso durante el 2017

y el primer semestre de 2018, y con un pico del 42% en el segundo semestre del 2021. Tomando en cuenta los altos niveles de inflación que se registran en el primer trimestre de 2022, todo indica que la situación tiende a agravarse.

En síntesis, el capital radicado en el país avanza fragmentando de manera creciente a la clase obrera, y pauperizándola en su conjunto. En los últimos años, la tasa de desempleo no aumenta como en la década del '90, sino que crece el empleo más precario, mientras que el empleo asalariado privado se mantiene estancado. Es en este contexto que cobra relevancia la situación de los ocupados plenos que son pobres. El capital local obtiene así una masa de plusvalía extraordinaria al lograr pagar la fuerza de trabajo de manera abaratada. Al hacerlo, mutila los atributos productivos de la clase obrera a partir de deteriorar sus condiciones de vida. En particular de los futuros sustitutos de la actual fuerza de trabajo: los niveles de pobreza más altos se registran en los niños y adolescentes menores de 18 años. La contracara de este fenómeno, como veremos, es la expansión insuficiente de la política asistencia en general y de las políticas de transferencia de ingresos en particular, que cobraron fuerza en estos últimos años sobre la base de la organización y la movilización política de la clase obrera.

3. La conflictividad social durante la pandemia⁹

Como planteamos en el apartado anterior, la clase obrera argentina se ha ido transformando por el rol de la baja salarial en la valorización de capital, con su consecuente fragmentación y empobrecimiento. Dada esta fragmentación su acción político-gremial se encuentra también fragmentada. Encontramos, por tanto, diversas formas de acción de distintas fracciones de la clase obrera en torno a las medidas gubernamentales implementadas durante la primera parte de la pandemia a partir del establecimiento del ASPO.

El sector de la clase obrera empleada por el Estado con plenos derechos laborales o por capitales manufactureros y de servicios (47% de los ocupados)¹⁰, pudo cumplir con el aislamiento y apoyó en general las medidas gubernamentales. Este elemento explica a su vez las diferencias regionales, que pueden entenderse por la cantidad y densidad de la población, pero también por el peso del tipo de empleo. En provincias donde el empleo es mayormente público¹¹ así como las que concentran el empleo industrial registrado¹², la capacidad de sostener el aislamiento fue mayor y, por tanto, también la legitimidad de las medidas.

Esta porción de la clase obrera llevó adelante principalmente demandas referidas a la preservación de los puestos de trabajo, la defensa del salario de los trabajadores formales afectados y la regulación del teletrabajo donde se empezó a aplicar. Asimismo hubo demandas sobre condiciones de seguridad para los trabajadores de los sectores

⁹Como señalamos en nota al pie n° 3, esta reconstrucción fue realizada sobre un trabajo de fuentes propio.

¹⁰Los datos de mercado de trabajo corresponden a los publicados por el INDEC para el primer trimestre de 2020.

¹¹Las provincias con mayor proporción de empleados públicos son Catamarca, La Rioja, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Las provincias que menos empleados públicos tienen en forma proporcional son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe (datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social).

¹²En 2019 la Provincia de Buenos Aires concentró el 42% del empleo manufacturero formal de la Argentina. En el ranking continúa la Capital Federal (16%), Santa Fe (11%), Córdoba (9%) y Mendoza (4%) (datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social).

esenciales exceptuados de realizar el aislamiento, principalmente en el ámbito de la salud, pues concentró inicialmente a gran parte de les contagiades.

En este ámbito y al inicio de la pandemia se instaló un debate político que luego perdió fuerza: la discusión en torno a la forma fragmentada que tiene el sistema de salud argentino y la necesidad de su centralización. Por otra parte, se llevaron adelante jornadas de lucha, movilizaciones, “aplusazos”, concentraciones, radios abiertas y caravanas de enfermeras y médicas con reclamos por condiciones laborales y salariales, cantidad de agentes y por condiciones de seguridad para les trabajadores del sector. Asimismo se desarrollaron manifestaciones de apoyo al personal de salud por su papel fundamental en el tratamiento frente a la pandemia en general y ante ataques a sujetos particulares.

En el nivel educativo uno de los ejes de los reclamos fue el de la accesibilidad de docentes y estudiantes a los dispositivos y conexión para la educación a distancia. Los gremios del ámbito público realizaron pedidos de equipamiento y conectividad para garantizar la escolaridad a distancia implementada a partir del cierre de los establecimientos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) organizaciones no gubernamentales presentaron acciones ante la justicia, que ordenó que el Estado debía garantizar computadora portátil, notebook o tablet y acceso gratuito a internet a todes les estudiantes de nivel primario y secundario que asistían a establecimientos de gestión pública o privada de cuota cero (medidas que el gobierno de la CABA no implementó).

Por otro lado, docentes realizaron medidas en distintas provincias y a nivel nacional reclamando por condiciones de trabajo a distancia, salariales y de convenio. Sin embargo la mayoría de las demandas estuvieron asociadas a la cuestión asistencial, pues en Argentina la escuela ocupa un lugar central en la provisión de alimentos (más de 4,5 millones de niños). En vinculación con esto se llevó adelante un debate en torno a la responsabilidad del personal docente en el desarrollo de tareas asistenciales.

En el ámbito educativo universitario se convocó a un apagón virtual en reclamo por la apertura de las paritarias y contra el fraccionamiento del medio aguinaldo, pues una de las medidas adoptadas por el gobierno fue el fraccionamiento del aguinaldo de una parte de los empleados públicos.

La importancia de estos conflictos refleja que, pese a la caída del peso de la industria, la tasa de sindicalización en el Estado y grandes empresas en Argentina se mantiene alta, constituyendo a los sindicatos en un actor de peso. Si bien aquellos ligados políticamente al gobierno actual negocian, se observa la presencia de corrientes clasistas dispuestas a realizar acciones de protesta.

Como dijimos en la introducción, la porción de la clase obrera compuesta por trabajadores informales (35,8% de los asalariados), desocupades (10,4%) y subocupades demandantes (8,2%), así como habitantes de villas (9,5% de la población) y población indígena (2% de la población), es la más negativamente afectada tanto por la enfermedad como por las medidas implementadas.

En el ámbito de las pequeñas empresas, donde impera la falta de derechos asociados al empleo, los salarios son más bajos (Espro y Zorattini, 2012) y no hay presencia sindical, la crisis tiene efectos profundos. A este sector se suma el de cuentapropistas de subsistencia y de desocupades, que explican en parte la centralidad del reclamo de medidas asistenciales para hacer frente a la situación.

Sin embargo, la informalidad no es una característica exclusiva de la pequeña empresa y les cuentapropistas de subsistencia, sino que alcanza también a un sector

importante de trabajadores calificados (Elbert, 2015). Se trata de una población muy afectada por la crisis, no alcanzada por las redes clásicas de la asistencia social y que va presentando mayores disidencias con las medidas gubernamentales adoptadas conformando lo que se conoció como un “movimiento anticuarentena”.¹³

La población asentada en villas, por su parte, fue una preocupación gubernamental de primer orden por la imposibilidad de garantizar el aislamiento y el distanciamiento social. Fue allí en donde el virus se expandió con mayor velocidad en un primer momento, dando lugar, como veremos, a muchas de las medidas de lucha que hemos relevado.

Argentina tiene una larga tradición de movimiento de desocupados (Seiffer, 2011) y de luchas por el hábitat y la vivienda, en especial de los habitantes de las villas y asentamientos que se expresa en tendencias vinculadas a la iglesia, al peronismo y a la izquierda, diferenciadas tanto por las demandas como por las formas de acción política (Pacheco, 2018).

Frente al aumento de la pobreza por la imposibilidad de realizar venta de mercancías, changas o trabajos informales en el servicio doméstico, las relaciones de solidaridad tuvieron gran importancia, sobre todo en la gestión de alimentos.¹⁴ Se observa una gran participación de partidos políticos y organizaciones territoriales que llevan adelante acciones de entrega de alimentos o medicinas, preparación de comida, atención de los ancianos y sanitización de los barrios.

¹³Su argumento era que el daño que provocaba a la sociedad el parate económico era mayor que el del propio virus. En el plano económico se reclamaba la apertura de comercios e industrias, mientras que en el plano institucional se demandaba una mayor actividad del Congreso y del poder judicial para lograr un equilibrio de poderes ante las decisiones del gobierno nacional. Representaron a un sector de empresarios, en particular pequeños comerciantes, y trabajadores autónomos; al mismo tiempo que articularon con un sector de la oposición política (conformada también por fracciones de la clase obrera) que integraba la coalición política que perdió las elecciones en 2019 (Juntos por el Cambio). Personificaron la oposición política al gobierno más importante de ese momento. Sus protestas tuvieron un desarrollo desigual entre la capital del país y el interior debido a la desigual presencia del virus y a las posibilidades materiales de sostener la cuarentena, al tiempo que la respuesta policial y judicial fue más contundente en las ciudades del interior que en la Ciudad de Buenos Aires. El movimiento se inició con cacerolazos una semana después de anunciarse la cuarentena. En términos generales, estas manifestaciones se mantuvieron con una frecuencia semanal durante el mes de abril. Durante ese mes, intelectuales y políticos opositores, como el ex presidente de Argentina Mauricio Macri, firmaron una serie de cartas públicas (que fueron respondidas por otro grupo de científicos) donde se afirmaba que la crisis del coronavirus constituía una amenaza a la democracia liberal y se pronunciaban en contra de la “infectadura”, una dictadura de los infectólogos que asesoraban al Presidente. Estos pronunciamientos se expresaron en movilizaciones precedidas por fuertes campañas en redes sociales y medios de comunicación tradicionales. En términos generales, si bien tomaron diferentes consignas puntuales en cada caso, propusieron una apertura “inteligente” de la cuarentena acompañada de reclamos institucionales frente al avance de las decisiones tomadas por el gobierno nacional.

¹⁴La militancia territorial no es novedosa, se remonta a fines de los años '50 y es expresión de las transformaciones de la clase obrera de las que venimos hablando. Ya entonces, se observa una tendencia a la diferenciación que se expresa en la aparición de organismos específicamente villeros que conviven con las formas sindicales clásicas. Esa tendencia se sostiene y se va pronunciando a mitad de la década de 1970 donde se consolida el trabajo territorial de la mano de la consolidación de esta porción de la población como sobrante para las necesidades inmediatas de la acumulación. Desde mediados de los '70 en adelante la forma territorial aparece totalmente diferenciada de las formas clásicas, como un “nuevo sujeto social”, que es presentado incluso en algunos casos como no perteneciente a la clase obrera (Pacheco, 2020).

Si bien se registran demandas de forma permanente, al ser una población que se encuentra sostenida por acciones de organizaciones políticas y territoriales, por las medidas gubernamentales adoptadas y por la ampliación de las redes asistenciales de las iglesias,¹⁵ no surgió de allí una oposición general al gobierno. Las organizaciones clasistas que actúan con independencia del gobierno realizaron acciones de manera permanente pero con poca repercusión general.

En las villas de la CABA y asentamientos de toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)¹⁶, un primer momento de la demanda se estructuró en torno a la necesidad de bolsones de comida para asistir a los comedores populares. Aunque no se trata de un reclamo que se agote en esta población pues el pedido de alimentos fue uno de los primeros reclamos y el más difundido a lo largo del país. La falta de ingresos se profundizó con el cierre de las escuelas que, como planteamos, tienen un rol importante en la provisión de alimentos.

Otro eje de las denuncias en las villas de la CABA se centró en el abastecimiento de agua potable. La villa más importante de la ciudad, Villa 31¹⁷, sufrió un corte de agua prolongado a un mes de declarado el ASPO, lo que se tradujo en un aumento exponencial de los contagios de COVID-19. Estos reclamos incorporaron a su vez el pedido de elementos de higiene para evitar la circulación del virus. El centro de los reclamos se dio por vía judicial, pero también se expresó en manifestaciones callejeras, denuncias en redes sociales y medios de comunicación.

Una vez que el COVID-19 penetró en las villas se esparció muy rápidamente dadas las condiciones de hacinamiento, falta de infraestructura urbana y la imposibilidad de sus residentes de cumplir con el aislamiento y contar con los insumos básicos de cuidado. Frente a esto organizaciones sociales solicitaron que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) implemente un protocolo de acción que contemple las condiciones de vida de sus habitantes. Los reclamos cobraron fuerza cuando estallaron los casos en la segunda quincena de mayo de 2020 en Villa 31 y murió una importante referente territorial (Ramona Medina de la organización La Garganta Poderosa). La visibilidad de quienes se han puesto en la primera línea de atención, fue uno de los argumentos que se tomaron para la implementación de una nueva política de transferencia de ingreso, el Programa Potenciar Trabajo, que amplió las ya existentes financiando a quienes realizan este tipo de actividades tipificadas como “de cuidados”.

¹⁵El lugar de la iglesia católica en la asistencia social a través de CÁRITAS es históricamente importante en el país, pero en los últimos años han tomado protagonismo, convirtiéndose en un actor de peso con los cuales los gobiernos establecen alianzas, distintas Iglesias Protestantes y Evangélicas. En el marco del ASPO las parroquias funcionaron como espacios de alojamiento de oficinas estatales para la tramitación de la política asistencial más importante del momento, el IFE (Arcidiácono y Perelmiter, 2022), cuyo análisis presentaremos en el siguiente apartado.

¹⁶El AMBA es el conjunto más importante del sistema urbano de la Argentina y agrupa alrededor del 34% de la población total (lo que corresponde al 37% de la población urbana). Se compone por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 24 municipios localizados en la provincia de Buenos Aires, ocupando una superficie de 2.714 km², de los cuales cerca de 2.150 km² se encuentran urbanizados. Esta, a su vez, forma parte de una Región Metropolitana más amplia (RMBA) que incluye a 16 municipios más con grandes áreas rurales (Maceira, 2020a).

¹⁷Su importancia está dada por su localización geográfica en pleno centro de la CABA y de rápido acceso a aeroparque y todo el cordón norte, lo que hace que sus terrenos sean caros y que sus habitantes se constituyan en una fuente importante de fuerza de trabajo de servicios de limpieza, cuidados, construcción, trabajadores de las aerolíneas, comercio, etc.

A partir de la expansión de los contagios en la Villa 31, el GCBA y el gobierno nacional implementaron el Plan DetectAR, que consistió en buscar en los barrios a las personas con síntomas de COVID-19 para testearlas. La forma de su implementación y funcionamiento fue denunciada por el traslado de casos sospechosos compartiendo colectivo y espacio en los hospitales sin medidas de prevención para quienes eran regresados a sus hogares por testeo negativo, abandono de niños cuando se separa a la persona adulta responsable y por la exposición de miembros de organizaciones sociales con tareas que deberían ser garantizadas por profesionales.

Si bien el COVID y el pico de contagios impactó más tarde en los asentamientos del conurbano bonaerense, se encuentran problemáticas similares a la de los habitantes de las villas en CABA al momento de cumplir el aislamiento obligatorio. En esta región encontramos que hubo un alto acatamiento, siendo las causas de su posible ruptura la búsqueda de aprovisionamiento de comida y de insumos de higiene o salud, las condiciones de vivienda (hacinamiento y falta de recursos básicos), imposibilidad de continuar pagando el alquiler, discontinuidad laboral y falta de ingresos laborales. También apareció la problemática de la falta de cajeros automáticos en los barrios, lo cual impidió el acceso a dinero en efectivo, sobre todo el recibido vía política asistencial o sistema previsional.

Las luchas en todo el AMBA en torno a cuestiones relativas al COVID-19 pasaron a un segundo lugar durante el segundo semestre de 2020 cuando se retomó la demanda histórica de urbanización con medidas de toma de tierras (el caso más conocido fue el de Guernica).

Entre los sectores más pauperizados de la clase obrera se encuentran también los reclamos de la población indígena, a quienes se le suma una cantidad de problemas específicos dados por el contexto rural y el modo particularmente represivo que tuvieron las fuerzas de seguridad (Tamagno *et al*, 2020). Para esta porción de la población el ASPO profundizó la crisis con el desabastecimiento de provisiones: alimentos, agua potable, leña, energía eléctrica y la imposibilidad de comercializar productos de su producción (alimentos y artesanías), hacer “changas” y de vender su fuerza de trabajo en las cosechas (Tamagno *et al*, 2020). Asimismo, la forma coercitiva en la implementación de las medidas generó reacciones violentas, entre ellas la implementación de cercos como medida de contención en las comunidades afectadas por el COVID-19, como en la Qom de la provincia de Chaco. Un caso extremo se dio a conocer allí con la denuncia de la irrupción de personal de la policía a una vivienda que incluyó tortura y abusos sexuales. La respuesta estatal fue el desplazamiento de los efectivos involucrados y la apertura de un proceso penal. El mismo presidente de la Nación se pronunció ante este hecho calificándolo de violencia institucional y una “deuda de la democracia”. Pero esta situación no es exclusiva de este territorio, referentes indígenas y organizaciones sociales denuncian el ensañamiento policial con los sectores más empobrecidos a lo largo y ancho del país evidenciando que se trata de prácticas sistemáticas.

De manera transversal encontramos demandas en torno a la política habitacional. Se puso en discusión el problema del tipo de vivienda adecuada para realizar el ASPO, la necesidad de congelar alquileres, frenar los desalojos y el uso de viviendas sociales aún no habilitadas. Asimismo, estuvo en discusión el problema de las viviendas no utilizadas, para lo cual se propuso la implementación de un impuesto específico que no logró avanzar.

Por otra parte, encontramos acciones tendientes a exigir la implementación de medidas especiales para mujeres que vieron exacerbadas las expresiones de violencia de género dado el contexto de aislamiento. De manera temprana la Campaña por la Emergencia en Violencia de Género exigió mediante una protesta con un “Ruidazo desde balcones” la implementación de medidas especiales contra la violencia de género y los femicidios en el marco del ASPO. Si bien la cantidad de femicidios fue similar a la de años anteriores, las llamadas a las líneas de atención a víctimas de violencia y las denuncias por violencia de género se incrementaron el 39% durante la cuarentena (Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, 2020).

4. La política asistencial durante la pandemia: alcances y límites

Dado el proceso de empobrecimiento extendido, de las demandas de distintos sectores de la clase obrera de las que dimos cuenta, de las demandas de los capitales que operan en el país con fuerza de trabajo registrada y de pequeña burguesía (productores independientes de mercancías), el gobierno nacional implementó una serie de políticas asistenciales de transferencia de ingresos complementarias a las ya existentes.

La más importante, por alcance y erogación, fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se trató de una prestación implementada por el gobierno de Fernández en la etapa más dura de la restricción a la circulación pero que se mantiene vigente hasta la fecha. El pago de las tres ediciones del IFE durante 2020 representó un gasto de 265.712 millones de pesos corrientes. Se abonó en tres oportunidades durante 2020, y una durante el 2° trimestre de 2022, a 8,9 millones de personas (19,4% de la población total). El monto fue de \$10.000 durante las ediciones de 2020 y de \$18.000 durante 2022. Como lo señala la ANSES, se trata de la prestación monetaria de mayor alcance de la historia argentina, al cubrir casi a un quinto de la población. Los destinatarios fueron trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales, monotributistas de categorías A o B, trabajadoras de casas particulares y personas que se encontraban desempleadas. Además se incluyó a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).¹⁸

De acuerdo a un informe elaborado por la ANSES (2020), si se observa a los beneficiarios del IFE, se encuentra que ha alcanzado como nunca antes lo hizo una política asistencial a un universo muy grande de varones, representando el 44,3% del total. Al examinar por rango etario, la mayor proporción de beneficiarios se ubica entre los 25 y 34 años (33,3%), seguido por el de 18 y 24 años (28,2%), rango etario que obtuvo los mayores índices de desocupación a fines del 2019 (23% al IV trimestre de 2019). Varios autores plantean que la inscripción superó con creces las proyecciones del gobierno y, en coincidencia con nuestro análisis, que resultaron demandantes de la misma sujetos con un perfil diferente al de la asistencia social clásica (Arcidiácono y Perelmiter, 2022; Arcidiácono y Gamallo, 2020; Centrángolo y Curcio, 2020).

La implementación de esta política asistencial tiene un correlato a nivel del gasto público nacional y del gasto social en particular, pero representó apenas el 3% de este último. En cambio, el gasto público consolidado, que incluye los niveles provincial y municipal, se mantuvo casi estable (3% de variación interanual), lo que implica que hubo

¹⁸Quiénes eran perceptores de AUH y AUE fueron incorporados inmediatamente al IFE, el resto tuvo que inscribirse de manera virtual, con un elevado nivel de rechazos que alcanzó a 4 millones de personas (Arcidiácono y Perelmiter, 2022) y dio lugar a muchas demandas.

una contracción del gasto en los niveles subnacionales o, una tendencia a su centralización.

El gasto público nacional en 2020 registró una variación positiva interanual de 11,1% en términos reales. Esta expansión se corresponde con un crecimiento del conjunto de los rubros del gasto nacional total. Los gastos destinados a Promoción y asistencia social registraron una variación positiva de 105,5% en relación al 2019 en términos reales. Pero, como puede observarse en el siguiente cuadro, se ubicó en el tercer lugar en los aumentos cuando fue el rubro de Servicios económicos el que tuvo el incremento más significativo con una diferencia abismal en la función Seguros y Finanzas.

Ranking de las principales variaciones interanuales de las partidas del gasto público nacional ejecutado en términos reales, 2020.

Finalidad	Función	2019	2020	Var. % i.a. 2020
Servicios económicos	Seguros y Finanzas	\$ 2.298	\$ 958.136	41586,0%
Administración gubernamental	Relaciones Interiores	\$ 148.066	\$ 315.497	113,1%
Servicios sociales	Promoción y Asistencia Social	\$ 166.529	\$ 342.189	105,5%
Servicios sociales	Vivienda y Urbanismo	\$ 46.835	\$ 85.706	83,0%
Servicios económicos	Industria	\$ 16.134	\$ 26.448	63,9%

Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto abierto e INDEC.

A diferencia del 2020, durante el 2021 el gasto público nacional ejecutado disminuyó -0,5% en términos reales. El rubro promoción y asistencia social, en cambio, registró un incremento de 51,3%, ubicándose séptimo en el ranking de las partidas de mayores aumentos.

Ranking de las principales variaciones interanuales de las partidas del gasto público nacional ejecutado en términos reales, 2021.

Finalidad	Función	2020	2021	Var % i.a. 2021
Servicios sociales	Trabajo	\$ 19.740	\$ 110.001	457,2%
Servicios sociales	Agua Potable y Alcantarillado	\$ 38.304	\$ 98.955	158,3%
Servicios sociales	Vivienda y Urbanismo	\$ 85.706	\$ 190.397	122,2%
Servicios sociales	Ciencia y Técnica	\$ 114.473	\$ 251.346	119,6%
Servicios económicos	Comunicaciones	\$ 14.628	\$ 26.490	81,1%

Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto abierto e INDEC.

Cuando se decidió la implementación del IFE algunos grupos denunciaron, entre otras cosas, la insuficiencia del monto asignado.¹⁹ Pasemos entonces a ver qué implicó el IFE para sus beneficiarios. Durante el 2020, la suma de dos salarios mínimo vital y móvil (SMVyM) no alcanzó a cubrir la canasta básica total para un hogar de dos adultos en edad de trabajar y dos menores. Si bien en promedio dos SMVyM se ubicaron 30,2% por debajo de la canasta básica total, la diferencia entre ambos montos pasó de ser el 26,2% en abril de 2020 al 34,7% en agosto de 2020. Durante el período abril-agosto 2020, la diferencia en promedio para cubrir la canasta básica total por individuo se ubicó en los \$10.221.

En torno a ese monto se ubicó el pago del IFE, que vino a compensar, de manera insuficiente, el hecho de que un porcentaje mayor de la población se ubicara por debajo de la línea de pobreza. Según el estudio ya citado de ANSES (2020), la implementación del IFE implicó evitar aumentos de aproximadamente 3 puntos porcentuales en la indigencia y de casi 6 en la pobreza. Sin embargo, al momento del pago del tercer y último IFE de 2020 (agosto 2020), el índice de precios al consumidor acumuló un aumento de 8,2%, mientras que el salario mínimo vital y móvil y el IFE se mantuvieron sin variación durante esa parte del año (\$16.875 y \$10.000 respectivamente), registrando una caída en términos reales de -7,6% en dicho período.

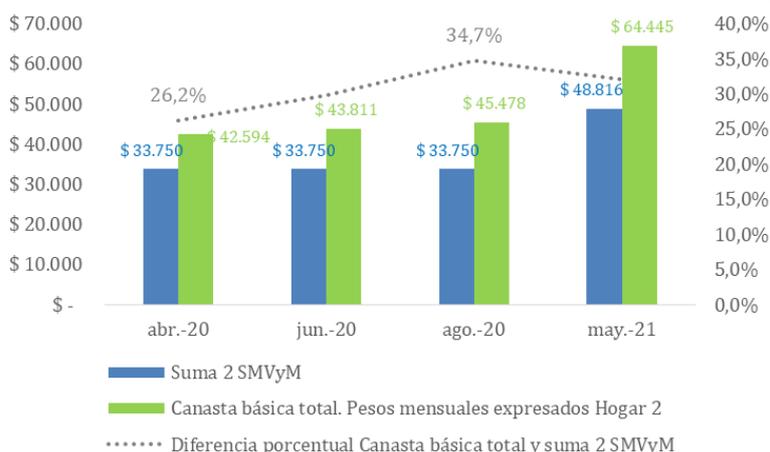
Durante el 2021, año en el que no se registraron pagos de IFE, la suma de dos SMVM se ubicó en promedio -20,1% por debajo de la canasta básica total para un hogar de dos adultos en edad de trabajar y 2 menores en edad escolar. Por lo tanto, fue una suma insuficiente para alcanzar la canasta básica total y estar por encima de la línea de pobreza. La situación fue más aguda a comienzos del 2021, momento en que a raíz de no actualizar los montos del SMVM, los dos salarios representaron apenas el 71% de la canasta básica total. Hacia el 3° trimestre de 2021 alcanzó el 88%, aun ubicándose por debajo de la línea de pobreza. En el primer trimestre de 2022, la situación es aún más penosa que la del año anterior. A raíz de los aumentos de los precios internacionales de los alimentos motorizados por la reducción de la oferta que implicó la invasión de Rusia a Ucrania, que acumulan a marzo 2022 una variación positiva de 21,1%, la suma de los SMVM se ubicaron -22,3% por debajo de la canasta básica total, dos puntos porcentuales por debajo del promedio 2021. Es en este escenario que se inscribe la decisión del gobierno nacional de adelantar a junio el aumento del SMVyM que sirve de orientación para la negociación de las paritarias.

En este punto vale la pena destacar que el pago del cuarto IFE que se lleva a cabo en el segundo trimestre del 2022, en el momento en que se escriben estas líneas, representa una caída en términos reales de -16,7% respecto al monto del primer IFE,

¹⁹Cristeche (2020) señaló además que en la medida en que el IFE puede ser percibido por un sólo miembro de cada grupo familiar, se perjudica especialmente a las familias numerosas y con niños menores. Asimismo se denunció el alto nivel de rechazos, en especial la población migrante, con gran representación en las villas, el retraso de los pagos (la primera cuota tardó dos meses) y las dificultades por el cierre de bancos en una población con un nivel bajo de bancarización. Este último punto es retomado en Beccaria, Costa y Rottenschweiler (2020). Como plantean distintos trabajos se trató de una política autofocalizada, en la medida que las personas debían inscribirse a través de la web de la ANSES de manera individual, y luego esperar la evaluación del organismo estatal. La atención pública se trasladó a canales virtuales, cuando no toda la población estaba en condiciones de poder utilizarlos (Danani, 2020). Esto llevó a la necesidad de “mediaciones sociales” (es decir canales informales) para que se concrete la medida (Arcidiácono y Perelmiter, 2022). Muchos individuos no estaban en condiciones de inscribirse por sí solos debido a la falta de recursos o la falta de experiencia, además de que el sitio web se saturaba en distintos momentos del día.

tomando abril como momento de pago. Mientras que el aumento nominal entre el primer y el cuarto IFE fue del 80% (\$10.000 vs. \$18.000), la inflación acumulada en estos dos años fue del 116% (abril 2020 vs. abril 2022). Teniendo en cuenta los altos índices de inflación mensual que se registran (por encima del 6% mensual), la situación se agravaría si el pago del IFE se concreta en mayo o junio de 2022.

Canasta básica total para un hogar de dos adultos en edad de trabajar y dos menores en edad escolar, y suma de dos Salarios mínimo vital y móvil en pesos corrientes (eje izquierdo) y diferencia porcentual entre ambos (eje derecho). Meses que corresponden al pago de los IFE.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y MTEySS.

Podemos afirmar que el IFE representó una transferencia de ingresos insuficiente para mitigar los efectos de la crisis desatada por la pandemia del COVID-19, que incluso fue disminuyendo en términos reales por el contexto inflacionario. Hay que considerar asimismo que el grueso de la transferencia de ingresos está destinada al consumo de alimentos, por lo tanto redundando en una ampliación de la demanda de las empresas productoras de bienes alimenticios, que registraron un incremento de sus ganancias.²⁰ Por otra parte, una parte considerable aparece como recaudación impositiva mediante el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que recae con una mayor incidencia en los sectores más pauperizados de la clase obrera.

Con la implementación del IFE se retomaron debates en torno a un Ingreso Universal. Beccaria, Costa y Rottenschweiler (2020), por ejemplo, se preguntan si se apunta a reconvertirse en una suerte de seguro de desempleo para trabajadores informales; o si el camino es hacia la implementación de un ingreso ciudadano universal, o la creación de un régimen universal de empleo mínimo de manera formal en la economía social. En un sentido similar, Kaplan y Delfino (2021), a partir de destacar la insuficiencia del IFE, se plantean la necesidad de diseñar un sistema de protección social que implique un rol integrador de la política social.

Además del IFE el gobierno nacional tomó otras medidas orientadas a mitigar los efectos de las restricciones a la circulación²¹. En relación con los jubilados, se otorgó un

²⁰Como ya señalamos con profundidad en otros trabajos el consumo obrero nunca es el fin en la forma capitalista de organizar el trabajo y el consumo sociales (Seiffer y Rivas, 2019).

²¹Enumeración tomada de ANSES, (2020). Boletín IFE I-2020: Caracterización de la población beneficiaria, Dirección General de Planeamiento – julio, p. 3. Disponible en: <http://observatorio.anses.gov.ar/archivos/documentos/Boletin%20IFE%20I-2020.pdf> Consultado 30/04/2022.

bono de hasta \$3.000 a alrededor de 4,6 millones personas. En simultáneo, se incrementó al doble el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Esta política alcanzó a más de 4,3 millones de niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, se aumentó a \$10.000 el seguro de desempleo.

Asimismo, en el marco de políticas públicas que no implicaron transferencias directas por parte del Estado, se suspendieron las interrupciones de servicios públicos por falta de pago, se prohibieron los desalojos y se congelaron los alquileres.

Por otra parte, vinculado con las demandas a las que hicimos referencia de capitales y pequeña burguesía se otorgaron más de 340.000 créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos y se creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) dirigido al grupo de trabajadores formales del sector privado. Este último representó, a septiembre del 2020, 148.559 millones de pesos corrientes²². El programa consistía en que el Estado brindaba una asistencia al salario, que estaba destinado a beneficiar en mayor medida a los asalariados de ingresos más bajos y a las PyMEs. Aproximadamente el 15% de los beneficiarios de la ATP fueron trabajadores que percibían un ingreso menor a un salario mínimo vital y móvil (\$16.875); en ese caso, el Estado cubría el 100%. En el siguiente estrato, aquellos que percibían entre uno y dos salarios mínimos, el Estado cubría un salario mínimo. De esta forma, aportaba alrededor del 50% del ingreso original del trabajador. De igual manera se procedía con aquellos que ganaban entre dos y cuatro salarios. Según estimaciones de la ANSES, el 42% de los beneficiarios de la ATP se ubicaba en este tramo. En último lugar, los que percibían ingresos superiores a los \$67.500, el Estado cubrió hasta un máximo de SMVM (\$33.750). De esta forma el Estado subsidió, ya no de forma mediada con una expansión del consumo, sino de manera directa, al capital que opera en el país.

5. Conclusiones

La implementación del ASPO tuvo un impacto diferente en las distintas fracciones de la clase obrera, de la pequeña burguesía y de los pequeños capitales que operan en el país. A lo largo del trabajo se describieron las numerosas movilizaciones y distintos tipos de protesta que impulsaron diferentes demandas de la clase obrera.

Las fracciones más pauperizadas reclamaron por asistencia alimenticia y monetaria para sostener su reproducción en un contexto de cuarentena. Como se trata de población alcanzada previamente por redes asistenciales la asistencia se pudo viabilizar más rápidamente y contener los reclamos.

Por otro lado, los cuentapropistas y las fracciones menores del capital comercial, que se vieron afectados de manera directa por la clausura de sus actividades, comenzaron una serie de protestas en contra de la cuarentena. Desde bocinazos hasta movilizaciones, pasando por declaraciones públicas a favor de una "cuarentena inteligente" por parte de la principal fuerza de oposición política.

Como planteamos, si bien el número de protestas es elevado, en términos relativos a la historia de la protesta en la Argentina no lo es. Las protestas que emergieron a raíz de la pandemia tienen un carácter de reivindicaciones inmediatas, que apuntan a buscar

²²CEP XXI (Septiembre 2020) *Informe de Panorama Productivo Evolución de los principales indicadores de la actividad productiva*, Ministerio de Desarrollo Productivo, p. 8. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/informe_de_panorama_productivo_-_septiembre_2020.pdf. Consultado 20/05/2022.

soluciones concretas a demandas puntuales. Con excepción de las intervenciones de carácter general que hizo la oposición política mayoritaria al gobierno, no aparecieron demandas que tomaran un carácter político general.

El contexto ¿post-pandemia? al que estamos asistiendo no evidencia una mejora en las condiciones de vida, más todo lo contrario. Dada esta situación se están potenciando demandas por el aumento de la asistencia social con grandes movilizaciones de un renacido movimiento piquetero. Se trata de una tendencia histórica en Argentina que se pone como eje de discusión política ante cada nueva crisis (Seiffer y Rivas Castro, 2017) y que hoy toma fuerza con el avance de propuestas de implementación de un ingreso básico universal.

De hecho, al momento de cerrar este artículo, una parte del oficialismo formalizó su propuesta en un proyecto denominado Salario Básico Universal. En la medida en que se concentra en distintas fracciones de la clase obrera en condiciones de pobreza y prevé una serie de contraprestaciones, tiene más de parecido que de diferente a los Programas de Transferencia Condicionadas que se impusieron masivamente en toda la región con el inicio del nuevo milenio.

Bibliografía

- ANSES, (2020). *Boletín IFE I-2020: Caracterización de la población beneficiaria*, Dirección General de Planeamiento – julio, p. 23. Disponible en: <http://observatorio.anses.gov.ar/archivos/documentos/Boletin%20IFE%20I-2020.pdf> Consultado 30/04/2022.
- ARCIDIÁCONO, P. y GAMALLO, G. (2020). *El Ingreso Familiar de Emergencia. Respuestas inmediatas y debates futuros*. Serie Debates Número 2. Grupo Derechos Sociales y Políticas Públicas, Buenos Aires.
- ARCIDIÁCONO, P. y PERELMITER, L. (2022). “Reconversiones del trabajo estatal de asistencia inmediata en tiempos de COVID-19”, en López, X. (comp.): *Política Social y Trabajo Social. Fundamentos y Debates actuales*, ICEP, CTSPBA, pp. 175-211.
- BECCARIA, A, COSTA, I. y ROTTENSCHWEILWER, S. (2020). *La innovación del Ingreso Familiar de Emergencia en tiempos de pandemia*. En: Segunda Serie Especial COVID-19. AMBA Actores territoriales y políticas públicas, Observatorio del Conurbano Bonaerense, UNGS. Disponible en [http:// observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/Beccaria-Costa-Rottenschweiler.pdf](http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/Beccaria-Costa-Rottenschweiler.pdf) Consultado 22/05/2022.
- CADEMARTORI, F., (2022). *Empleo estatal, procesos de trabajo y reproducción del capital. Trabajo Social en tiempos de precarización laboral*, Puka editora, Tandil.
- CAZÓN, F., KENNEDY D. y LASTRA, F., (2016). “Las condiciones de reproducción de fuerza de trabajo como forma de la especificidad de la acumulación de capital en Argentina: evidencias concretas desde mediados de los 70”, en *Trabajo y sociedad*, (27), 305-327.
- CENTRÁNGOLO, O. y CURCIO, J. (2020). *Los programas sociales para atender los efectos de la pandemia*, Fundación Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas (CECE), Buenos Aires. Disponible en <http://fcece.org.ar/author/cetrangolo-curcio/> Consultado 22/05/2022.
- CEP XXI (Septiembre 2020). *Informe de Panorama Productivo Evolución de los principales indicadores de la actividad productiva*, Ministerio de Desarrollo Productivo, p. 8. Disponible en

- [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/informe_de_panorama_productivo - septiembre 2020.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/informe_de_panorama_productivo_-_septiembre_2020.pdf). Consultado 20/05/2022.
- CRISTECHE, M. (2020). *Ingreso Familiar de Emergencia*, Buenos Aires, Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Disponible en https://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/academica/InformeIFEICJ-UNLP.pdf Consultado 21/05/2022.
- DANANI, C. (2020). "La protección como derecho humano: una salida de la emergencia con mirada estratégica". En: BOHOSLAVSJI, J. P. (editor). *Covid-19 y derechos humanos: la pandemia de la desigualdad*. Buenos Aires: Biblos. pp. 269-285.
- ELBERT, R., (2015). "Informalidad en la estructura de clases de Argentina: ¿Es el proletariado informal una nueva clase social?", en *Revista Pilquen*, Vol. 18, N° 3, pp. 50-65.
- ESPRO, M., & ZORATTINI, D., (2012). "La miseria de las PYMES. Pobreza y desarrollo en la Argentina reciente", en *V Jornadas de Economía Crítica*.
- IÑIGO CARRERA, J., (2007). *La formación económica de la sociedad argentina* (Vol. 1), Imago Mundi.
- IÑIGO CARRERA, J. e IÑIGO CARRERA, V., (2017). "Capitalismo y pueblos indígenas en el Chaco argentino: formas y determinaciones de una subjetividad productiva" en *Revista Antropologías del Sur*, Año 4 N° 7, pp. 117-139. Disponible: https://cicpint.org/wp-content/uploads/2017/07/JIC_Capitalismo-y-pueblos-ind%C3%adgenas-en-el-chaco-argentino.pdf
- KAPLAN, L. J., y DELFINO, A. (2021). "Pandemia, Políticas Públicas y sectores vulnerables: un análisis del ingreso familiar de emergencia en Argentina". *Política. Revista de Ciencia Política*, 59(1), 81-104.
- KORNBLIHTT, J., ESPRO, M., SUSTER, M. Y MUSSI, E., (en prensa). "La economía argentina reciente (2003-2019). Las razones del deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera", en Cáceres, V. (Ed): *Economía política: aportes para la enseñanza*. Ediciones UNGS.
- KORNBLIHTT, J., SEIFFER, T. y MUSSI, E. A., (2016). "Las alternativas al Neoliberalismo como forma de reproducir la particularidad del capital en América del Sur", en *Pensamiento al margen. Revista digital* N°4.
- KORNBLIHTT, J., SEIFFER, T. y VILLANOVA, N., (2014). "De la caída relativa a la caída absoluta del salario real en la Argentina (1950-2013)", en *Revista Guillermo de Ockham* n° 2.
- MACEIRA, V. (coord.), (2020b). *Habitar el conurbano. Problemas, conflictos y estrategias en contexto de Pandemia "Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del Conurbano Bonaerense desde una perspectiva multidimensional"*. Proyecto de investigación apoyado por la Agencia I+D+i. Universidad Nacional General Sarmiento.
- MACEIRA, V. et al., (2020a). *El Conurbano en la cuarentena: Condiciones de vida y estrategias de los hogares. "Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del Conurbano Bonaerense desde una perspectiva multidimensional"*. Proyecto de investigación apoyado por la Agencia I+D+i. Universidad Nacional General Sarmiento.
- MARX, K., (2005). *El Capital*, tomo I, vol. 3, Siglo XXI Editores, México.
- PACHECO, J., (2018). "La acción política de los 'villeros' en la Ciudad de Buenos Aires (1955-1982), en AA. VV.: "Dirán 'hubo gigantes aquí'". *Izquierda, peronismo y clase obrera en los '60-'70*, publicaciones del GEACH.

- PACHECO, J., (2020). "Problematizaciones en torno a la fragmentación de la clase obrera y la militancia territorial", en *III Jornadas Internacionales de Historia de los/las trabajadores/as y de las Izquierdas*, Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe.
- SEIFFER, T. y G. RIVAS, (2019). "De la teoría crítica de la política social a la crítica de la teoría de la política social. Elementos para el abordaje de la política social en Argentina como forma de reproducción de su especificidad histórica", en Mallardi, M. y Fernández, E. (comp.): *Cuestión social y políticas sociales. Crítica a sus fundamentos y expresiones contemporáneas*, Puka, Tandil, pp. 201-244.
- SEIFFER, T., (2011). "La lucha de clases y la política asistencial en Argentina, 2002-2007", en Mallardi, M., L. Madrid y A. Oliva: *Cuestión social, reproducción de la fuerza de trabajo y políticas de asistencia*, Carrera de Trabajo Social, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, pp. 49-75.
- SEIFFER, T., PACHECO, J. y MUSSI, E., (2020). "Alternative proposals in response to Covid crisis in Argentine", in *Global responses to Covid. Association for Promotion of Political Economy and Law, Institute for New Economic Thinking Young Scholar initiative and International University College of Turin*. Disponible en https://mapster.me/client_files/covid-map-reports/reports/6%20Argentina%20Seiffer,%20Pacheco%20&%20Mussi.pdf
- SEIFFER, T., KORNBLIHTT, J. & DE LUCA, R., (2012). "El gasto social como contención de la población obrera sobrante durante el kirchnerismo y el chavismo (2003-2010)", en *Cuadernos de trabajo social*, 25(1), pp. 33-47.
- TAMAGNO, L., BALAZOTE, A., RADOVICH, J. C., et. al., (2020). *Los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en las comunidades indígenas de la RMBA, NOA, NEA y Patagonia*, Instituto de Ciencias Antropológicas – Facultad de Filosofía y Letras- Universidad de Buenos Aires.